

EDITORIAL

Colombia es un país que históricamente ha padecido múltiples y complejas violencias. La confrontación entre los actores armados ha silenciado y, en muchos casos, suplantado el debate político que caracteriza a las democracias. La persistencia de una cultura política en la que el disenso y la diferencia conducen a la eliminación del otro genera graves consecuencias e impactos, principalmente, sobre la sociedad civil.

A pesar de esto, igualmente han sido múltiples las manifestaciones de resistencia ante la guerra. La bandera de la paz ha sido enarbolada por diversos sectores que abogan por la solución negociada a los conflictos que atraviesan nuestro país. Quizá el referente más cercano es el Acuerdo de Paz entre el Gobierno de Colombia y la exguerrilla de las FARC, firmado en 2016, el cual supone no solo el fin de la confrontación armada como vía para la solución de las controversias políticas entre las partes, sino también el inicio de un proceso de transformación política, social, económica y cultural que ha sido llamado posconflicto, posacuerdo, posguerra, entre otros.

Si bien el Acuerdo de Paz, a pesar de sus trabas en la implementación, ha permitido que la violencia disminuya o cese en determinadas zonas del país, también se han reconfigurado expresiones de la guerra en otros territorios, los cuales fungen como escenarios de disputa entre actores armados que, en virtud de sus intereses económicos y políticos, buscan imponer su voluntad. Tal vez la consecuencia más visible de esta imposición ha sido, desde la firma del Acuerdo, el asesinato sistemático de líderes sociales y de excombatientes, quienes han sido los principales defensores de sus territorios en asuntos como la reconciliación, el medio ambiente, la participación política, los derechos humanos, entre otros. Es evidente entonces que lejos de alcanzar una paz completa —si es que esta existe—, el país se encuentra en un momento en el que el posacuerdo, o sea cual sea la expresión más adecuada, requiere de esfuerzos aún mayores y contundentes por parte de todos los sectores involucrados que conlleven la superación de las raíces históricas de nuestros conflictos.

Uno de los actores importantes en esta transformación es la Universidad. Esta debe asumir un compromiso insoslayable con la construcción de paz, no solo siendo la principal fuente de generación de un conocimiento que permita comprender las lógicas de la guerra y encontrar soluciones a las problemáticas sociales que aquejan al país, sino también erigiéndose como un escenario para el debate y la discusión.

Sobre este último, es importante recordar lo que Bernard Manin, en su obra *Los principios del gobierno representativo*, denomina discusión pública o política. Para Manin, la discusión es un tipo de comunicación que tiene dos características esenciales. La primera es que al menos una de las partes trate de producir un cambio de posición en la otra parte, esto es, la discusión política supone la posibilidad de persuadir al otro, situación que implica necesariamente la existencia de múltiples visiones sobre algún asunto, así como el reconocimiento de poder cambiar de posición en virtud de los argumentos presentados. Si las partes no están dispuestas a ser persuadidas en algún momento de la discusión, el debate político es estéril y se inscribe en el plano del simple intercambio de información.

La segunda característica de la discusión pública es que las propuestas y argumentos presentados deben ser de carácter impersonal. Esto quiere decir que el debate tiene que corresponder con una dimensión racional, es decir, el intercambio de argumentos debe ser desinteresado para que así se produzca un proceso auténtico de persuasión. Por el contrario, cuando el cambio de posición está mediado por la existencia de una recompensa personal, se abandona el plano de la discusión política para entrar al ámbito del regateo, el cual se rige por otro tipo de preceptos.

Teniendo en cuenta lo anterior, si la academia quiere contribuir a la construcción de un país en paz, en el que no se emplee la violencia sobre la palabra, en el que las diferencias políticas no se tramiten por la vía armada, en el que prime el argumento razonado por sobre el argumento de autoridad, es fundamental que la discusión pública y el debate razonado sean sus principios rectores. La universidad debe entrañar en su *ethos* el espíritu del disenso, la persuasión y la deliberación de las ideas.

Por estas razones, desde la Revista de Estudiantes de Ciencia Política, de la Universidad de Antioquia, hemos concebido este espacio formativo como una plataforma de discusión y debate, en el que principalmente los

estudiantes presentan públicamente sus interpretaciones sobre la realidad política del país y el mundo. Es precisamente en contextos como los nuestros, en los que progresivamente se develan las problemáticas que antes estuvieron invisibilizadas por la guerra, donde adquiere mayor sentido fomentar la reflexión acerca de los diversos y complejos fenómenos de la política.

El presente número doble de la Revista de Estudiantes de Ciencia Política busca contribuir a este propósito. Se presenta una reflexión del modelo hobbesiano del estado de naturaleza a la luz del estudio de las Relaciones Internacionales. También se incluye un trabajo que indaga por la construcción de ciudadanía en las laderas de Medellín. Así mismo, se incluye un artículo que realiza un balance sobre diferentes estudios relacionados con la memoria, el arte y la ciudad. De igual manera, se publica una reflexión que aborda la transformación de las prácticas barristas en Medellín. Además, hace parte de este número un artículo que se pregunta por las formas de acción colectiva en el sector rural de la ciudad. Finalmente, se publican dos reseñas de libros que abordan temas como la reforma educativa en México y la política internacional.

FELIPE NIETO PALACIO